

**UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA**



**LA APLICABILIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO**

MANUEL RICARDO SORZANO ROMERO

MONOGRAFÍA

PROFESORA MARTHA RUEDA G.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y DEFENSA

ESPECIALIZACIÓN ALTA GERENCIA DE LA DEFENSA NACIONAL

BOGOTÁ

2012

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. HIPÓTESIS

3. PROCESOS DE PAZ

3.1 BELISARIO BETANCUR CUARTAS 1982-1986

3.2 VIRGILIO BARCO VARGAS 1986-1990

3.3 CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO 1990-1994

3.4 ERNESTO SAMPER PIZANO 1994-1998

3.5 ANDRÉS PASTRANA ARANGO 1998-2002

3.6 ÁLVARO URIBE VÉLEZ 2002-2008

4. INAPLICABILIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

4.1 CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES Y NO
INTERNACIONALES

4.2 ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA APLICACIÓN DEL DIH EN COLOMBIA

4.2.1 ASPECTOS HUMANITARIOS

4.2.2 ASPECTOS MORALES Y POLÍTICOS

4.3 NATURALEZA Y PRINCIPIOS DEL DIH

5. SÍNTESIS Y RESUMEN

LA APLICABILIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO

1. INTRODUCCIÓN

La materialización del proceso de paz que se viene desarrollando en Colombia puede ser sin lugar a dudas el hecho histórico más importante de los últimos tiempos en nuestro país. Desde el surgimiento de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC-EP) a finales de los años 50s hasta la fecha, el país ha estado sujeto a innumerables hechos de violencia generada por las disputas entre la fuerza pública y la guerrilla, episodios cruentos con daños irreversibles, producto de la consumación de delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional humanitario y consignados en nuestra legislación interna penal tales como el homicidio en persona protegida, la tortura en persona protegida, el acceso carnal violento en persona protegida y la utilización de métodos de guerra ilícitos, han venido recrudecido notablemente las prácticas bélicas de las partes involucradas en el conflicto, arrojando como resultado miles de muertes innecesarias, Otero (citado por redepaz 2008) manifiesta que “desde 1964, año escogido por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR- como referente para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz hasta marzo de 2007 se han cometido en Colombia 620.502 homicidios. En el mismo periodo se han registrado en promedio 90 mil muertos por el conflicto armado, 3’700.000 desplazados, 48.585 secuestros 22.935 actos de terrorismo y 4.270 masacres y en el peor de los casos, siendo evidente a la luz pública la arremetida de los grupos armados organizados al margen de la ley contra la población civil.

Es por ello que surge la imperativa necesidad de explorar caminos que persigan materializar acercamientos con las FARC-EP y por ende consolidar la paz en nuestro país.

Colombia se caracteriza por tener la insurgencia armada más prolongada de América Latina, sus orígenes datan desde los comienzos de los años sesenta, de la época inmediatamente posterior a la revolución cubana y de las ofensivas nacionales contra las llamadas repúblicas independientes. (Chernick, 1996, p.4)

Resulta evidente que en una eventual y exitosa negociación entre el Estado Colombiano y las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, (FARC-EP) la cual inició con la primera etapa materializada en las conversaciones exploratorias que se llevaron a cabo en la Habana Cuba en marzo de 2012 durante seis meses, posteriormente, la segunda etapa de este proceso que tendrá como destino la ciudad de Oslo Noruega en donde se discutirá la agenda de paz, y la fase final consistirá en implementar lo acordado con la presencia de veedurías estatales y ciudadanas.

De esta manera, comienza a cobrar fuerza la idea del papel que jugaría en adelante el derecho de la guerra frente a un cese definitivo de hostilidades y la reinserción de los militantes del grupo guerrillero que forma parte del actual proceso a la vida normal, con total garantía, de una digna y llevadera permanencia en la sociedad y su participación en la vida política colombiana.

2. HIPÓTESIS

Por estas razones, el propósito de este ensayo es el de demostrar la inoperancia del Ius ad bellum o derecho de la guerra y el Ius in bellum, como derecho de la guerra o Derecho Internacional Humanitario si se llega a algún acuerdo entre los negociadores que representan

al Estado Colombiano y las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el proceso actual de paz que se viene adelantando durante este año 2012 en la Habana Cuba y en el mes de octubre en Oslo Noruega.

El documento se dividirá en tres partes, en la primera se expondrán las negociaciones y procesos de paz que se vinieron adelantando entre el gobierno Colombiano y las guerrillas a partir de 1982, la segunda parte explicará los conceptos necesarios para definir a nuestro conflicto colombiano como un conflicto armado no internacional con el fin de facilitar el desarrollo de la hipótesis la cual nos lleve a sustentar la inaplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario en nuestro país si el proceso de paz actual se llega a materializar como exitoso, señalando las razones por las cuales el *Ius in bellum* desaparecería de las escenas nacionales; y la tercera, a manera de síntesis y recomendaciones se esbozarán las conclusiones del presente ensayo.

Colombia se ha destacado ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional como protagonista de episodios de conflictos constantes durante el siglo XIX el siglo XX y el siglo XXI,

El siglo XIX se caracterizó por sangrientas y permanentes luchas intestinas en nuestra patria. Diez grandes confrontaciones armadas, con carácter de guerras civiles, se presentaron en suelo colombiano en el transcurso del siglo pasado:

- a. La guerra civil de 1812 entre centralistas y federalistas
- b. La insurrección de José María Córdoba contra Simón Bolívar en 1829
- c. La revolución de los supremos (generales liberales), comandada por José María Obando, entre 1839 y 1840.
- d. La revolución de 1851, bajo la presidencia de José Hilario López.
- e. El golpe de Estado de 1854 protagonizado por el militar José María Melo en contra del presidente, el general Obando.
- f. La revolución de 1860 comandada por el general Tomás Cipriano de Mosquera en contra del presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez.
- g. La revolución de 1876 dirigida por los conservadores en contra del gobernante Aquileo Parra.
- h. La revolución de 1885 que se desarrolló durante la segunda presidencia de Rafael Núñez, y se originó en las protestas de un sector de la población por la injerencia del primer mandatario en la vida de los Estados.
- i. La revolución de 1895, durante la presidencia de Miguel Antonio Caro.
- j. La guerra de los mil días que se inició siendo presidente Manuel Antonio Sanclemente. (Villamizar, 1997, p.19)

3. PROCESOS DE PAZ

Es menester afirmar que los conflictos mencionados con anterioridad estuvieron sujetos a negociaciones y posteriores acuerdos en los cuales se vieron beneficiados los alzados en armas con amnistías e indultos.

Así sucedió en 1877 cuando el poeta y novelista Jorge Isaacs encabezó una revolución que derrocó del poder al presidente del Estado federado de Antioquia, Don Pedro Restrepo Uribe. La salida a este conflicto estuvo enmarcada por la firma de un acuerdo de paz entre fuerzas gubernamentales e insurgentes, “convenio patriótico” que se constituye en unos de los antecedentes históricos de los procesos de negociación política a las confrontaciones. (Villamizar, 1997, p.20)

Esto nos indica que a través de la historia política de nuestro país, los conflictos finalmente han llegado a acuerdos entre sus partes; las figuras de indultos o amnistías han sido las alternativas para llegar a consensos materializables, lo cual explica que las negociaciones de paz deben tener como espíritu la cesión de derechos para los insurgentes como una garantía para que el proceso de paz resulte siendo exitoso.

Antecedentes como el de la República de Marquetalia, lugar en donde se asentaron un grupo de campesinos de orientación ideológica comunista liderados por Pedro Antonio Marín alias Manuel Marulanda y Jacobo Arenas quienes posteriormente se identificarían como los fundadores de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP y su posterior territorio sujeto a la operación del ejército llamada como su mismo nombre, con el propósito de aniquilar las fuerzas insurgentes dieron origen a lo que es hoy la organización guerrillera más importante del país.

Marulanda afirma en ese libro que entre 1949 y 1953 los destacamentos guerrilleros liberales en el sur del Tolima fueron ocho, y los dirigidos por los comunistas fueron catorce. Él se incorpora después de la muerte de Gaitán a una guerrilla liberal integrada por familiares suyos y vecinos del municipio de la región. Tenía entonces alrededor de 18 años. Eran destacamentos campesinos de autodefensa, que históricamente se enfrentaban a las matanzas de la oligarquía conservadora. Este factor a mi juicio, configura la extrema complejidad del proceso colombiano, muy diferente al de Cuba y los países mencionados de Centroamérica. (Castro, 2009, p. 53)

Es así que se comienza a conformar el grupo guerrillero que más daño ha hecho al país y a los colombianos, sus incursiones extorsivas contra la población civil, los secuestros, el reclutamiento de menores, la minas antipersona, y su alianza con el narcotráfico como fuente para subsistir económicamente han fortalecido un conflicto que lleva más de medio siglo sin llegar hasta el momento a algún acuerdo en el que cese la violencia y no permita más desangrar el Estado Colombiano.

3.1 BELISARIO BETANCUR CUARTAS 1982-1986

En el año de 1982 llega al poder el dirigente conservador Belisario Betancur con el propósito de negociar con la guerrilla, y aunque no se llegó a la tan anhelada paz y para muchos observadores y analistas el proceso fue un fracaso se evidenciaron propuestas adecuadas que abrieron las puertas a negociaciones futuras con cambios estructurales,

Durante el gobierno de Betancur se llegó a unos acuerdos del cese al fuego, se abrieron mesas de discusión sobre los grandes problemas del país y se plantearon grandes reformas políticas sobre puntos clave como la situación agraria, urbana, legislativa, así como los derechos humanos. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en ningún campo. No duraron los pactos de tregua. No se alcanzó la paz. (Chernick, 1996, p.5)

3.2 VIRGILIO BARCO VARGAS 1986-1990

Corría el año de 1986, una época plagada por la violencia, en donde el narcotráfico permeaba la clase política, aterrorizaba el país entero y causaba muertes de inocentes; lamentablemente esa era la noticia de cada día, para ese entonces llega al poder el dirigente liberal Virgilio

Barco Vargas con la firme intención de darle un vuelco a la situación de violencia que afectaba a los colombianos.

Al igual que su antecesor, el recién elegido Presidente de Colombia no ahorró esfuerzos para liderar un nuevo proceso de negociaciones con la guerrilla y creo la Alta consejería para la Reconciliación, Normalización y rehabilitación de la presidencia como motor propulsor de un nuevo camino hacia la paz en el país, la cuál tuviera como propósitos fundamentales la búsqueda del desarme del grupo armado organizado al margen de la ley y la incorporación de sus militantes a la actividad política de manera legal.

Al llegar Virgilio Barco al poder (1986-1990), su gobierno hizo una evaluación de la política de paz de Betancur. Los nuevos consejeros concluyeron que sus predecesores no tenían un proyecto definido, no había metas claras ni cronogramas o fechas límite precisas, no había tiempo de difusión; había demasiados actores sociales involucrados, pero sin un compromiso definido y efectivo por parte del gobierno. (Chernick, 1996, p.5)

El proyecto era de por si ambicioso, y se denominó mano tendida, pulso firme, no obstante “En el fondo, el objetivo principal no era negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar al Estado y deslegitimar a la guerrilla. Es decir, para Barco podía haber negociaciones, pero ya no entre dos partes, sino entre un Estado que conscientemente representaba a la ciudadanía y unos grupos guerrilleros que cada vez eran menos legítimos, pero que podrían aspirar a participar en la vida política del país.” (Chernick, 1996, p.5), la intención del gobierno nacional condujo lamentablemente a perder tres años de negociaciones en los cuales el hecho de haber accedido al cese al fuego fue aprovechado por el grupo insurgente para aumentar sus militantes y robustecer sus frentes.

Sin embargo no todo fue fracaso en el camino hacia la paz, y en el año de 1989 se volvió a retomar el sendero hacia la materialización de la paz con los grupos al margen de la ley,

Después de un largo período en el que vio morir a varios de sus mejores hombres, el M-19 encontró su norte y en Colombia se volvió a hablar de la solución política negociada a la guerra. Fue precisamente un acto de guerra, el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, el que permitió que de nuevo se dialogara y se hablara de reconciliación. El clímax de sus esfuerzos por la paz en Colombia se sintió cuando Carlos Pizarro firmó, el 10 de enero de 1989; una primera declaración con Rafael Pardo en nombre del gobierno nacional. Un año más tarde después de un proceso cargado de altibajos, luego de intensas negociaciones, el M-19 asistía a su desmovilización como organización político militar. El tiempo de la paz había llegado. (Villamizar, 1997, p.19)

3.3 CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO 1990-1994

El año de 1990 llega al poder el economista liberal César Gaviria Trujillo, su gobierno se caracterizó por la instalación de la asamblea nacional constituyente y la promoción de la Constitución política de 1991 la cual consignó transformaciones trascendentales para el Estado Colombiano tales como la creación de la Fiscalía General de la Nación, el estatuto de la oposición y la relevancia que se le da a los Derechos Humanos.

En materia de la persistencia de buscar alternativas para llegar a la paz en el país la administración Gaviria no fue ajena a materializar intentos como sus predecesores, y de igual manera ofreció posibles soluciones a los grupos guerrilleros,

Jesús Antonio Bejarano, quien fue consejero presidencial para la paz en esta época, responsable por las negociaciones con las FARC-EP y el ELN en las reuniones de Caracas en 1991, ha escrito que el gobierno de Gaviria quería distinguir entre la solución del conflicto armado y la discusión de los grandes problemas nacionales con la guerrilla. Afirma que la guerrilla pretendía discutir sobre la crisis nacional, pero que no estaba interesada en una solución al conflicto armado. Conceptualizando así, con la desmovilización de los grupos alzados en armas como requisito principal para la paz, la política de Gaviria no equivalía mucho más que la prolongación de la estrategia maquiavélica de la administración Barco. (Chernick, 1996, p.6)

La estrategia del Presidente César Gaviria no ayudó mucho al éxito de las negociaciones con los grupos guerrilleros vinculados al proceso, todo lo contrario, en el intento de extender lo planteado y aplicado en el Gobierno del Presidente Virgilio Braco Vargas, respecto a su proceso de paz, disminuyeron las probabilidades de una salida exitosa al conflicto armado

colombiano, nuevamente el desinterés de la guerrilla colombiana por debatir los problemas trascendentales del conflicto no fueron tenidos en cuenta y la condición de una desmovilización por parte del Gobierno Nacional no resultó una estrategia atractiva para los intereses de los grupos guerrilleros que participaban en las negociaciones del periodo gubernamental del año 1990 al año 1994.

3.4 ERNESTO SAMPER PIZANO 1994-1998

Con la llegada del Presidente Ernesto Samper Pizano a la Casa de Nariño, nuevamente se evidenció el propósito de llegar a algún acuerdo con las guerrillas colombianas, la voluntad del presidente fue la de tratar con prioridad todos los asuntos relacionados con el conflicto armado colombiano, con esa finalidad, el mandatario solicitó un informe al alto consejero para la paz donde se evaluara lo sucedido en los procesos de negociaciones que precedieron a su mandato para así tomar de esas experiencias lo bueno para poder aplicar con astucia nuevas estrategias para poder llegar a acuerdos definitivos con los grupos insurgentes.

Samper quiso darle un viraje a la política de los últimos años de Gaviria que pretendía tratar a la guerrilla como un grupo de bandidos y secuestradores, sin reconocer su carácter político. Samper restauró la concepción política del conflicto armado colombiano, Y después de 100 días, cuando el alto consejero para la paz rindió su informe, también afirmó que, a pesar de todas las guerrillas siguen siendo actores políticos y que sí existían las condiciones para negociar con ellos. (Chernick, 1996, p.7)

3.5 ANDRÉS PASTRANA ARANGO 1998-2002

La elección de Presidente Andrés Pastrana Arango estuvo directamente ligada con el espaldarazo que le dio el secretariado de las FARC-EP a su campaña en la segunda vuelta electoral en el año de 1998, la inclinación del grupo guerrillero a negociar con su gobierno fue claramente evidente y ayudó sin lugar a dudas a que su elección como primer mandatario del país se cristalizara.

Lamentablemente los deseos no se cristalizaron como se esperaba, la silla vacía, el despeje militar y el engaño a que fue sometido el Estado Colombiano rompieron todo acercamiento que previamente se había logrado, eliminando cualquier sentimiento de confianza establecido antes de la elección y durante el gobierno del presidente conservador, nuevamente los Colombianos estaban presenciando otro fracaso de un proceso de paz que si bien comenzó con cierto optimismo por parte del Gobierno Nacional y los Colombianos fue herido de tal manera que no se pudo volver a revivir.

3.6 ÁLVARO URIBE VÉLEZ 2002-2008

Finalmente llega el 2002 y toma posesión el 07 de agosto de ese mismo año el dirigente liberal antioqueño Álvaro Uribe Vélez como presidente de los Colombianos, su proclividad a establecer puentes con la guerrilla de las FARC-EP resultó inocua a la vista de los colombianos y la comunidad internacional, y ante un acuerdo humanitario propuesto por el grupo al margen de la ley con el propósito de canjear guerrilleros presos por secuestrados, la respuesta fue los controvertidos rescates militares que terminaron con la muerte del gobernador Guillermo Gaviria Correa y el ex ministro de defensa Gilberto Echeverri.

En materia de paz lo único que se puede reconocer fue su apoyo a la ley de justicia y paz la cual permitió la negociación entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Gobierno Nacional.

El conflicto armado interno se ha identificado en nuestro país por disputas internas entre la fuerza pública del Estado y los grupos armados organizados al margen de la ley, el secuestro, la extorsión, el tráfico de estupefacientes, los ataques a la fuerza pública y a la población

civil, quebrantando los postulados del Derecho Internacional Humanitario por parte de la guerrilla de las FARC-EP y la defensa de las fuerzas armadas del territorio y la población civil, identifican la gravedad de la situación de la guerra en Colombia y obligan a las partes del conflicto armado a crear caminos de solución a las hostilidades que permitan lograr la consolidación de la paz.

4. INAPLICABILIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

La segunda parte del presente documento pretende justificar la inaplicabilidad e inoperancia del Derecho Internacional Humanitario si se llega a materializar el éxito en el proceso de paz que se viene adelantando entre Colombia y las FARC-EP en la Habana Cuba y en Oslo Noruega.

Resulta necesario plasmar algunas nociones de conflicto armado con el fin de entender las reflexiones que se hacen en torno a la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario en caso de un eventual proceso de paz exitoso.

La Unidad de alerta de la Escola de cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (citado por Valencia, 2007) Considera conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas que, usando armas u otros medios de destrucción, provocan más de 100 víctimas en un año. La cifra de 100 muertes debe relativizarse en función de otros elementos, como la población total del país y el alcance geográfico del conflicto armado, así como el nivel de destrucción generado y los desplazamientos forzados de población que conlleva. En un mismo Estado puede haber más de un conflicto armado.

Tres de las condiciones de la anterior noción se enmarcan en el Conflicto Armado colombiano, en primer lugar existe un enfrentamiento entre fuerzas armadas regulares e irregulares, la Fuerza pública y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en segundo lugar la cifra de muertos entre las fuerzas armadas de la Nación, y el grupo al margen de la ley sujeto al análisis en este documento superan notablemente los 100 muertos

al año, cifras reproducidas y justificadas en la primera parte del ensayo y en tercer lugar encontramos la agravación del desplazamiento de la población civil de la zona rural hacia otros sitios del país, en especial hacia Bogotá.

Estas condiciones sin lugar a dudas se enmarcan en la realidad del conflicto armado colombiano y en lo que manifiestan los postulados del Derecho Internacional Humanitario.

Otra noción de conflicto armado que ayuda a articular el nuestro en el Derecho Internacional Humanitario la manifiesta Ahlstrom (citado por Valencia, 2007) considerado que Según el proyecto COW (Correlatos of War Project de la Universidad de Michigan), se debe hablar de conflicto armado interno cuando 1) existen combates armados en 2) el territorio de un Estado, 3) que involucran al Estado y a otras fuerzas organizadas, y 4) existen al menos mil muertos relacionados con esos combates, de los cuales 5) fue ocasionado por el actor más débil.

Nuevamente estamos frente a unas de las características del conflicto armado que avalan su naturaleza, desarrollo y articulación en el Derecho Internacional Humanitario: 1. existen combates armados entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC-EP, 2. se desarrollan en territorio colombiano, 3. involucran al Estado por medio de su gobierno, instituciones, población civil y al grupo subversivo, 4. la cifra de muertos excede las mil personas como se relaciona en las cifras demostradas al inicio del ensayo y 5. ocasionadas por las FARC-EP.

De igual manera y con el ánimo de seguir articulando el conflicto armado colombiano en el Derecho Internacional Humanitario, “El artículo 1 del protocolo adicional II parte del presupuesto según el cual existen solo tres clases de protagonistas que pueden ser considerados como partes en un conflicto interno: las fuerzas armadas del Estado, las fuerzas armadas disidentes y un grupo armado bajo condiciones muy estrictas” (Ramelli, 2008, p.63). Una vez más nos encontramos con otras de las características de la guerra en Colombia, esta vez al interior de la normatividad de la reglamentación de la guerra, evidenciada en el protocolo adicional II el cual menciona las partes de un conflicto armado interno las cuales

para nuestro caso cumplen su lugar la Fuerza Pública con la fuerza aérea, la armada, el ejército y la policía nacional. Por otro lado, la otra parte, las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Con esta ultima noción nuevamente se articula no solo en los conceptos de ilustres conocedores de la normatividad del Ius bellum o derecho de la guerra o Derecho Internacional Humanitario como por ejemplo Alejandro Valencia Villa y Alejandro Ramelli Arteaga, sino también se articula en el Ius ad bellum o el derecho a la guerra, situación que perfectamente identifica lo que ocurre en nuestro país.

Es así que cobra importancia la necesidad diferenciar nuestro conflicto armado colombiano conociendo si es internacional o no internacional.

4.1 Conflictos armados internacionales y no internacionales:

La diferenciación entre conflictos internacionales y no internacionales está inmersa en los convenios de Ginebra y se está establecido precisamente para establecer competencias de intervención de organismos internacionales, Estados y cortes penales para juzgar los delitos de lesa humanidad y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario,

Para efectos del derecho humanitario, los conflictos armados internacionales son los que surgen entre dos o más Estados, háyase o no declarado la guerra, aunque uno de los Estados no haya reconocido el estado de guerra (artículo 2 común de los convenios de Ginebra de 1949) o aquellos “...en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho a la libre determinación...” (artículo 1.4 del protocolo II de 1977). Los conflictos armados no internacionales son los que surgen en el territorio de un Estado (artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949): (Valencia, 2007. p.92)

La definición en la cual se expresa la caracterización y naturaleza de los conflictos armados es clara al manifestar la esencia de los conflictos armados internacionales y no internacionales; este último entiende lo que para Colombia significa su guerra; en varias parte del territorio nacional se han sostenido combates de manera regular entre las fuerzas armadas de Colombia y las FARC-EP, y así, se hayan visualizado situaciones en que los militantes de los grupos terroristas pernoctan en Estados vecinos, ocultos de las autoridades y gozando de su amparo, el conflicto armado colombiano no se excluye de las connotaciones dadas por el Derecho Internacional Humanitario y permanece articulado dentro de la denominación de ser por excelencia un conflicto armado no internacional.

Como complemento de la anterior definición de conflictos armados internacionales y no internacionales, afirma Guell (citada por Valencia, 2007)

Un conflicto armado interno constituye toda situación de violencia regular, generalizada e incontrolable que se produce en la esfera interna de un Estado y ello al margen del eventual grado de organización interna que tengan las partes así como del grado de nitidez con que pueda procederse a la identificación de las fuerzas gubernamentales y no gubernamentales.

Ahora bien, una vez plasmadas las definiciones que enmarcan al conflicto armado colombiano en la normatividad del Derecho Internacional Humanitario es oportuno dar inicio a sustentar la hipótesis que sujeta el presente documento,

Solferino en la región de Lombardía en 1859, publicará Recuerdo de Solferino, libro que conmovió a Europa en 1862. Sus preocupaciones filantrópicas aunadas con las de otros cuatro compatriotas, persuadieron al Gobierno suizo para que celebrara la conferencia internacional de Ginebra que arrojó como resultado el inicio de actividades del comité Internacional de la Cruz Roja y la convención de Ginebra del 22 de agosto de 1864. A partir de ahí empieza el verdadero desarrollo del Derecho Internacional Humanitario. (Valencia, 1991, p.18)

La batalla de Solferino en la cual participaron el ejército Austriaco y las fuerzas adeptas a Napoleón se constituyó como el mejor ejemplo para empezar a pensar en humanizar la guerra dadas las prácticas cruentas que se efectuaban en medio de la confrontación bélica como bien

lo fueron los bombardeos indiscriminados no solo en contra de los militares, sino también de la población de la localidad de Solferino y el abandono y agonía de los heridos en batalla.

El suizo y filántropo Jean Henry Dunant al presenciar estos acontecimientos abogó por la creación de cuerpos de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra y fue el precursor de la Cruz Roja internacional.

4.2 Aspectos prácticos de la aplicación del DIH en Colombia:

Los siguientes aspectos denotan la necesidad de aplicar el Derecho Internacional Humanitario en un conflicto armado:

1. Aspectos humanitarios:

Sin duda, el primer y principal aspecto práctico de la aplicación de las normas humanitarias es la posibilidad de ofrecer y asegurar a la población civil no combatiente y que no participa en las hostilidades ni en los enfrentamientos armados, la prevención de los riesgos propios de las acciones de las guerrillas y de los operativos militares, (Mondragón, 1992, p.57)

Si bien el espíritu de todo conflicto armado de naturaleza nacional o no internacional persigue arremeter contra las fuerzas armadas de un Estado o los militantes de las fuerzas irregulares, en muchas oportunidades se ha visto lesionado el Derecho Internacional Humanitario al transgredir sus reglas en el momento en que se perjudica a la población, civil, dichas normas son utilizadas para evitar precisamente este tipo de hechos que atenta contra las personas inocentes.

2. Aspectos morales y políticos:

Un número importante de los colombianos no creen que la violencia sea la forma adecuada de expresarse y actuar políticamente. Tampoco aceptan que los cambios y reformas sociales que requiere nuestro país solo se pueden lograr por vías violentas, muchas veces violatorias de los Derechos Humanos y contrarias a las normas del DIH, menos aceptan que esas vías violentas requieran el empleo de métodos terroristas. (Mondragón, 1992, p.63)

La mejor forma para que un proceso de paz llegue a buen fin es la salida política o negociada, contrario a lo deseado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez el cual deseaba encontrar la paz con la derrota de las FARC-EP, distinto sucede con lo que plantea el actual proceso de negociaciones encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón cuyo fin es el de mediante los diálogos alcanzar la paz en Colombia.

4.3 Naturaleza y principios del DIH:

El Derecho Internacional Humanitario- conjunto de normas convencionales o consuetudinarias cuyos objetivos son los de proteger a las personas afectadas por hostilidades y solucionar los problemas humanitarios que ellas ocasionan-, es aplicable tanto a los conflictos armados de carácter internacional como a los de carácter interno. (Villarraga, 1998, p.424)

De igual manera, y frente a la protección de civiles no combatientes, Swinarski (citado por Villarraga, 1998) manifiesta que “Los principios y normas del DIH busca proteger a la persona de las consecuencias de la guerra Pretende. humanizar los conflictos bélicos en cuanto ello sea posible”.

“Por tal razón, se apoya en dos pilares fundamentales:

1. La limitación del uso de la fuerza
2. La distinción entre combatientes y no combatientes”. (Villarraga, 1998, p.424)

El espíritu en la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados siempre va a estar enfocado en la defensa de las personas no combatientes, por esa razón y a la luz de una prolongación del conflicto colombiano, las normas de Derecho Internacional Humanitario seguirán aplicándose para las partes involucradas en la guerra.

Según Arendt, Schmitt, (citado por Villarraga, 1998) El DIH está estructurado en lo fundamental, sobre la base de que la paz es una meta y un criterio de aplicación en el presente, en medio del aquí y del ahora de la guerra y no un fin diferido en su única y gran realización al futuro. El DIH está así, preparado para habitar en forma paciente la guerra, como si fuera a ser muy larga, como si alcanzar la paz fuera un imposible.

Indudablemente la aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario obedecen estrictamente a la existencia, continuación y prolongación de todo conflicto armado sea no internacional o internacional, depende exclusivamente de la duración de la situación de guerra hasta la firma de un tratado de paz y alto al fuego de las partes.

para el tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia: ...existe un conflicto armado siempre que se recurra a la fuerza armada entre los Estados o violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre tales grupos de un Estado. El Derecho Internacional Humanitario se aplica desde el inicio de tales conflictos armados y se extienden más allá de la cesación de hostilidades hasta que se celebra un tratado de paz; o, en el caso de conflictos internos se alcanza un acuerdo pacífico. Hasta ese momento, el Derecho Internacional Humanitario continúa aplicándose en el territorio entero de los Estados en guerra o, en caso de conflictos internos, todo territorio bajo control de una parte, si ahí toma lugar o no un combate real". Tribunal Penal internacional de la antigua Yugoslavia caso Tadic, decisión del 2 de octubre de 1995, segunda instancia, párr. 70. (citado por Valencia, 2007. p.84)

La cesación de hostilidades en un conflicto armado no garantiza de ninguna manera la dejación de aplicar el Derecho Internacional Humanitario, un ejemplo de ello es la situación que vive actualmente el proceso de paz de nuestro país, las negociaciones que se han venido adelantando entre el Gobierno Nacional y los Voceros de la guerrilla de las FARC-EP, en ningún momento han declarado un cese al fuego, si bien el grupo al margen de la ley ha manifestado la intención de hacer una tregua y llevar el proceso sin la utilización de las armas, los representantes del Gobierno han tomado experiencias anteriores de negociaciones frustradas las cuales se caracterizaron por conceder zonas de despeje y obviar las armas, lo cual se constituyó contraproducente y aventajó a la guerrilla para su fortalecimiento en su pie de fuerza e indirectamente avaló la facilidad para seguir delinquiendo en el país.

Si bien en Colombia el actual proceso de paz se percibe como serio, estructurado, Y planeado, mientras las partes involucradas no lleguen a un acuerdo de paz en el cual se materialice la reinserción de los militantes del grupo guerrillero de las FARC-EP, se les de la prerrogativa de participar de manera activa en la política nacional, se les conceda peticiones

en materia de inversión extranjera y reforma agraria, el Derecho Internacional Humanitario no dejará de aplicarse para las partes involucradas en nuestro conflicto armado interno.

Por lo anterior se hace necesaria la disposición de las partes involucradas en el conflicto Colombiano para bien de sus ciudadanos para que la toma de decisiones del Estado y las FARC- EP persiga el propósito de acabar con la guerra que tanto daño ha hecho al país.

En otras palabras, una eventual negociación exitosa conduciría a la inaplicabilidad permanente del Derecho Internacional Humanitario y la retoma de la normalidad y la desaparición del miedo en todo el territorio nacional.

Qué es lo que hay que hacer para llegar a la paz en Colombia? Yo sigo pensando que se puede llegar a una paz duradera con la guerrilla. Y hay que estar preparados para cuando llegue la oportunidad de sentarse a la mesa de negociación otra vez. Yo diría que cuando se combinan las lecciones que han dejado las anteriores negociaciones en Colombia con la experiencia internacional, se llega a la siguiente conclusión adicional: el gobierno tiene que ser audaz para llegar a la paz, mucho más audaz de lo que ha sido; tiene que trazar una agenda que comprometa a la guerrilla y satisfaga sus reclamos históricos. Es decir, hay que buscar una agenda que implique cambios fundamentales (y necesarios) en el país. Es muy difícil que la guerra pueda rechazar una agenda de tal envergadura. A mi modo de ver hay tres temas que tienen que ser abordados en la mesa de negociaciones para llenar esos requisitos: la reforma estratégica de seguridad nacional del país, Reforma agraria y el poder local. (Chernick, 1996, p.5)

La reforma estratégica de la seguridad nacional reflejada en la ruptura del ejército con grupos paramilitares, la reforma agraria con la equitativa distribución y tenencia de la tierra y el poder local como cargos en los cuales prefieran acceder los militantes del grupo guerrillero de las FARC-EP, en el momento en que se desmovilice y por supuesto se llegue a un acuerdo de paz el cual permita a las nuevas generaciones vivir en condiciones saludables en términos de seguridad e indirectamente desaloje la operatividad del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado Colombiano.

5. SÍNTESIS Y RESUMEN

En síntesis, la inaplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado interno colombiano depende naturalmente de las decisiones que se han venido tomando previamente al encuentro en Cuba, ahora en Oslo y donde dispongan las partes posteriormente para reunirse.

De hecho, la iniciación de un proceso de paz el cual conduzca o no al éxito de las negociaciones tampoco es razón para que el Derecho Internacional Humanitario deje de llevarse a cabo en cualquier conflicto, sea internacional o no internacional.

La categorización del conflicto armado nuestro se enmarca en lo requerido por las normas del DIH y por ello el protagonismo de él en la guerra.

Sin duda alguna su creador Henry Dunant aportó con su lucha por humanizar las guerras y establecer unos límites excepcionales para la crueldad que se venía evidenciando en todas las guerras del mundo.

Es así, que en muchos otros conflictos internacionales y no internacionales en todos los continentes, el DIH es respetado, de no ser así la comunidad internacional se vendría lanza en ristre para los infractores de las reglas de la guerra.

Un claro ejemplo de experiencias de conflictos los cuales han vulnerado las reglas del Derecho Internacional Humanitario y son penalizadas por tribunales creados para tratar los crímenes de guerra es,

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia señaló que la violación sexual causa dolor y sufrimiento severo, tanto físico como psicológico. El sufrimiento psicológico que causa se exagera por una serie de factores sociales y culturales y puede ser particularmente grave y duradero. (Valencia, 2007, p.362)

De igual manera otra forma de vulnerar las reglas del Derecho Internacional Humanitario pero esta vez en otro Estado, otra naturaleza de conflicto y otro delito lo sustenta lo ocurrido en la Nación africana Rwanda:

Según Akayesu, (citado por Valencia, 2007, p. 359) En el fallo del Tribunal (Penal internacional para Rwanda) dictado el 2 de septiembre de 1998, se reconoce por primera vez que pueden formularse cargos por actos de violencia sexual por ser elementos constitutivos de una campaña de genocidio.

Uno de los conflictos que más trascendencia tuvo durante el siglo XX fue el que se desarrollo en Sudáfrica el cual consistió en la segregación, dividiendo los diferentes grupos raciales con la excusa de promover el desarrollo,

Los comentarios del protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (protocolo I) (citado por Valencia, 2007, p.389) manifiesta que: El literal c del numeral 4 del artículo 85 del protocolo I de 1977 señala que son infracciones graves “las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degradantes, basadas en la discriminación racial, que entrañen un ultraje contra la dignidad personal”, Esta infracción, ateniéndonos a los comentarios del protocolo I, buscaba esencialmente castigar las prácticas de segregación y discriminación racial, que aparecen incluidas dentro de la expresión “crimen de apartheid” que se encuentra en el artículo II de la convención internacional sobre la Represión y el castigo del Crimen de apartheid de 1973.

Los anteriores ejemplos nos muestran como, las guerras y conflictos en el mundo transgreden permanentemente las normas del Derecho Internacional Humanitario, no obstante, para fortuna de la reglamentación humanitaria se han creado instituciones facultadas para la investigación y penalización de los delitos cometidos durante los conflictos armados.

Lo recomendable para coadyuvar en la inaplicabilidad del DIH en Colombia consiste en el apoyo al Gobierno de turno, a los negociadores y a la Fuerza pública en el proceso de paz,

intentando por intermedio de las asociaciones de carácter civil ser incluidas en la mesa de negociaciones ya que estas gozan de un criterio imparcial y objetivo de la realidad del conflicto, razón suficiente para aportar cuestiones positivas al conflicto.

Con la inclusión de otras partes en la mesa de diálogos, sin duda alguna se construirían salidas a la guerra, finalizando con el derramamiento de más sangre de las partes, con el dolor de las familias, frenando el desplazamiento y todos los delitos conexos a esto y en particular los crímenes de guerra, conduciendo a una mayor inversión extranjera la cual generaría empuje digno entre otras cosas.

En resumidas cuentas seríamos vistos por el mundo entero de una manera distinta a la de ahora y respiraríamos un aire nuevo el cual permita a las nuevas generaciones vivir en un país diferente.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

Castro, F. (2009). La paz en Colombia.

La habana Cuba: Editora política.

Chernich, M. (1996, octubre-diciembre). Aprender del pasado, Breve historia de los procesos de paz en Colombia. Colombia internacional, (36), p.4.

Mondragón, M. (1991). Derecho Internacional Humanitario, su aplicación en Colombia. Bogotá, PNUD.

Valencia, A. (1991). La humanización de la guerra Derecho Internacional Humanitario y conflicto armado en Colombia.

Bogotá, Tercer mundo Uniandes.

Villamizar, D. (1997). Un adiós a la guerra, memoria histórica de los procesos de paz en Colombia.

Bogotá Colombia: Planeta.

Villarraga, A. (1998). Derecho Internacional en Colombia.

Bogotá. Tercer mundo

Valencia, A. (2007). Derecho Internacional Humanitario, conceptos básicos, infracciones en el conflicto armado colombiano.

Bogotá, Nuevas ediciones Ltda.

Ramelli, A. La constitución colombiana y el Derecho Internacional Humanitario. Bogotá, 2008, Externado de Colombia

Redepaz, 2008, víctimas del conflicto armado en Colombia: perfil, escenarios, autores y hechos, Sistematización y análisis de denuncias realizadas en Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca, recuperado de <http://www.redepaz.org.co/IMG/pdf/VICTIMASDELCONFLICTOARMADOENCOLOMBIA-2.pdf>